

*Pedimento del Procurador General de la Nacion.*

El Procurador general de la nacion dice: que en el Juzgado de Distrito del Estado de Campeche, se siguió un juicio de comiso por aprehension de 20 barriles de harina, que durante la noche fueron aprehendidos en una canoa que los descargaba en la costa.

El Juzgado de Distrito, en atencion á que la introduccion de la harina se hacia sin los documentos legales, en hora avanzada de la noche; y que los conductores de la canoa huyeron precipitadamente al ser encontrados, declaró que los 20 barriles y la canoa habian caido en la pena de comiso y mandó además que se abriese juicio criminal para averiguar la culpabilidad del capitan del Pailebot Inglés "Lizzie Lina" y de cualesquiera otras personas complicadas en el fraude. Revisada esta sentencia por el Tribunal de Circuito de Yucatan, la confirmó en todas sus partes causando así ejecutoria. Por tal motivo y porque los tribunales han procedido legalmente, el Procurador general pide, se dé por revisada la causa.

México, Julio doce de mil ochocientos setenta y uno.—*L. Guzman.*

*Auto de revision.*

México, Julio catorce de mil ochocientos setenta y uno.

Por revisada, y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Julio diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Alejo Gomez Eguarte*, oficial 2º y archivero.

**AMPARO.**

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por el Lic. Pedro Perez Maldonado, en representacion de D. Andres Avila, contra el C. Gobernador del Estado, por violacion de garantías.*

**PEDIMENTO FISCAL.**

El Gefe de Hacienda federal que suscribe en ejercicio de la promotoria fiscal por ministerio de la ley, evacuando el traslado que se le corrió por ese juzgado en el presente negocio, expone: Que investido el Supremo Gobierno general de facultades extraordinarias por el Congreso de la Union, en Agosto de 1863 expidió una ley para prevenir y castigar los delitos de infidencia á la patria. A esa ley siguieron algunas circulares aclaratorias que puntualizaban algunas prevenciones de la mencionada ley, dictando el referido Supremo Gobierno la última en Chihuahua, el 21 de Noviembre de 1866, que fué por la que se ejecutó el secuestro y confiscacion de los bienes de D. Andrés Avila.

De esos bienes, todos inmuebles, solo le fué confiscada una casa ubicada en esta ciudad la que á pedimento del gobierno del Estado, fué cedida por el Ejecutivo de la Union á la junta de instruccion pública del referido Estado, para que sus frutos se destinasen al fomento de la ensefianza primaria.—Esta cesion suprema, fué verificada el año de 1868.

La ley general de 14 de Octubre del año próximo pasado, en su artículo 8º, dispone que sean devueltos á los infidentes sus bienes que á esa fecha no estuvieren aún enagenados: la casa en cuestion, como se vé, á la promulgacion de la referida ley de Octubre ya estaba enajenada, puesto que hacia dos años que la junta de instruccion pública disponia de ella y de sus frutos, conforme á la donacion que de la referida finca le hizo el Supremo Gobierno, investi-

do, como estaba aun, con facultades extraordinarias.

La resolucíon suprema de 21 de Noviembre de 1870, que dió el Ministerio de Gobernación al representante de D. Andrés Avila, y que se ve en la foja 18 vuelta de este expediente sobre este mismo negocio, confirma el parecer que ha expuesto esta promotoria.

Por los fundamentos expresados, y con vista de las supremas resoluciones dictadas sobre este particular, esta promotoria opina porque no ha lugar al amparo que se solicita en favor de D. Andrés Avila.

Aguascalientes, Junio primero de mil ochocientos setenta y uno.

Es copia que certifico.—*Diego Ortigosa.*

#### *Otro pedimento fiscal.*

El Cefe de Hacienda que suscribe, en ejercicio de la Promotoria fiscal, por ministerio de la ley, expone:

Que segun se vé á fojas 15 frente del expediente, los bienes pertenecientes á D. Andrés Avila fueron secuestrados y confiscados por supremas disposiciones dictadas por el Ejecutivo de la Union, en uso de las facultades extraordinarias con que fué investido por el Congreso general.

Esos bienes los constituian un rancho y una finca urbana, el primero fué extraído de la confiscación, para hacer con él pago al C. Catarino Palos; solo la segunda sufrió la pena de la confiscación.

La relacionada finca urbana fué cedida y donada al Gobierno del Estado, para que con sus productos se fomentara la instrucción primaria del referido Estado: esto se ve á fojas 22 frente.

Esos son los puntos de hecho.

Respecto á los de derecho, esta promotoria sostiene su parecer ya emitido en el pedimento anterior, supuesto que el Supremo Gobierno pudo ceder y donar la relacionada finca para fomentar y sostener la ense-

ñanza pública de este Estado, así como pudo y llevó á efecto la venta y enajenación de intereses incursos en las leyes dictadas contra los infidentes.

La ley general de 14 de Octubre del año anterior, al conceder la amnistía á los acusados de infidencia, y al mandar les fuesen devueltos sus intereses, exceptuó á los que estuviesen ya enajenados.

Esa resolucíon sancionó la enajenación que de los intereses confiscados habia verificado el Ejecutivo de la Union.

Se confirma mas esto, al ver la resolucíon suprema dada á la solicitud que hizo el C. apoderado del C. Andrés Avila, pidiendo la devolución de la finca en cuestion. Esa suprema resolucíon fué expedida el 21 de Noviembre de 1870, posterior, como se vé, á la ley de 14 de Octubre del mencionado año. Dicha resolucíon se lee á fojas siete frente y vuelta.

Lo expuesto creo, esta promotoria, que es bastante para probar que el ejecutivo de la Union obró dentro de la órbita de sus facultades legales, así para dictar las leyes que creyó convenientes para castigar el delito de infidencia, como para hacerlas cumplir en el terreno de la práctica.

Este es el sentir de esta promotoria; sin embargo, ose Juzgado resolverá lo que crea de justicia.

Aguascalientes, Junio diez de mil ochocientos setenta y uno.—*A. Cornejo.*

#### *Alegato de buena prueba presentado por el C. Lic. Pedro Perez Maldonado.*

Señor Juez de Distrito.

Pedro Perez Maldonado por el ciudadano Andrés Avila cuya representación tengo acreditada, ante vd. alegando de buena prueba en el juicio que he promovido en solicitud de amparo de garantías violadas en perjuicio de mi poderdante, respetuosamente digo: que por las constancias de autos visibles á fojas 7 y 8, 17, 18 y 19, 21,

23 y 26, y por la circular del ministerio de Justicia de 21 de Noviembre de 1866, constan con plena demostracion los hechos siguientes:

Primero. Que mi poderdante, considerado infidente, fué castigado con la pena de confiscacion de todos sus bienes entre los que se hallaba la casa á que se refiere el documento de fojas 23 y 26.

Segundo. Que esta pena dura y hasta cruel, fué ejecutada por la Gefatura Superior de Hacienda de este Estado sin conocimiento de la autoridad judicial, ni haber sido convicto el penado del delito que se le imputaba.

Tercero, y por último: Que de los bienes confiscados de que se trata, existia una casa ubicada en la calle de la hospitalidad de esta ciudad al tiempo de publicarse la ley de amnistía de 14 de Octubre del año anterior, y no se devolvió á mi poderante, sin embargo de haber gestionado sobre su devolucion.

De estos tres hechos surgen cuatro capitales cuestiones de derecho, cuya solucion es necesaria para conceder ó negar el amparo pedido.

Primera. ¿Pudo el Ejecutivo de la Union, en virtud de sus facultades extraordinarias decretar la pena de confiscacion?

Segunda. Si se resuelve afirmativamente esta cuestion, ¿pudo el mismo ejecutivo aplicar esta terrible pena por medio de sus agentes fiscales, sin conocimiento ni intervencion alguna de la autoridad judicial?

Tercera. ¿La donacion hecha por el ejecutivo de la Union al del Estado de los bienes confiscados á mi poderdante, para que los dedicara á la enseñanza primaria, es legal y válida consistiendo en bienes raíces?

Cuarta, y por último: ¿El gobierno del estado por sí, ó por medio de la junta directiva de enseñanza primaria, pudo adquirir en propiedad ó administrar por sí los bienes donados, siendo de la especie indicada?

Es un hecho, señor Juez, que existe una

ley llamada de confiscaciones dada por el ejecutivo de la Union en 15 de Agosto de 1863: que en virtud de esta ley y varias circulares posteriores, se confiscaron varias propiedades por las oficinas de hacienda federal, y que de las propiedades confiscadas dispuso libremente el mismo ejecutivo; pero yo no controvierto sobre la existencia de unos hechos que confesaría el mismo Pirrosini sobre su legalidad.

Hallo que la ley de siete de Junio de mil ochocientos setenta y uno, es la primera que suspende ó limita algunas de las garantías declaradas al hombre por la seccion primera, título primero de la Constitucion federal: la de once de Diciembre del mismo año, y las de tres de Mayo y veintisiete de Octubre de mil ochocientos sesenta y dos, empiezan por declarar vigente la primera y continúan concediendo al ejecutivo de la Union tal suma de facultades, que con la restriccion de respetar las garantías que la de siete de Junio citada, respetó en todo ó en parte, conservar la integridad del territorio nacional, la forma de gobierno establecida en la Constitucion y los principios y leyes de reforma, todo lo puede.

Sigo paso á paso el texto de la ley de siete de Junio, y hallo en su artículo 7º, que respetó la garantía del art. 41 de la Constitucion federal, que consiste en que nadie podrá ser castigado con pena propiamente tal, si no por la autoridad judicial, salvo el caso en que se trate de un delito político por el que, podrá ser castigado el delincuente con la pena propiamente tal, de reclusion, confinamiento ó destino que no pase de un año; ya por el gobierno general, ya por los gobernadores de los estados. Esta es la única excepcion; pero como la excepcion no destruye la regla, sino por el contrario la afirma, vivifica y prueba necesariamente su existencia; síguese de aquí que quedó existente la regla, y ésta consiste, en que nadie podrá ser castigado con pena propiamente tal, sino por la autoridad

judicial. Tengamos presente esta proposición y pasemos adelante.

La garantía concedida por el art. 22 de la Constitución, que consiste en que quede prohibida para siempre la confiscación, está respetada en toda su plenitud por la mencionada ley de siete de Junio de mil ochocientos sesenta y uno, como puede verse en sus artículos 7, 8 y 9: en el 7º establece la excepción del artículo 21 para solo los delitos políticos; en el 8º fija el sentido ó significación del delito político, y en el 9º pasa á modificar el art. 25 de la Constitución, dejando ileso y vigente en toda su plenitud el 22.

Reasumiendo, resulta: que el art. 21 de la Constitución que garantiza que nadie puede ser castigado con pena propiamente tal, sino por la autoridad judicial, está vigente con la sola excepción de que se trata de un delito político, por que podrá ser castigado el delincuente gubernativamente, con la pena propiamente tal de reclusión, confinamiento ó destierro, que no pase de un año; y que el art. 22, que concede la garantía de que la pena de confiscación estará para siempre prohibida, está vigente en toda su plenitud; luego el ejecutivo de la Unión al establecer la pena de confiscación en el art. 1º de la ley de 16 de Agosto de 1863, con tanta profusión que no distinguió siquiera los diversos grados de culpabilidad de los infidentes para hacer la pena equitativa proporcionándola á la magnitud del delito; así como al ejecutar esta dura y cruel pena por sus agentes fiscales, sin conocimiento de la autoridad judicial ante quien debieron ser convencidos los iniciados de infidencia, extralimitó sus facultades y violó las dos garantías de que he hecho mención.

La concesión de facultades extraordinarias para dictar cuantas providencias exigieran las circunstancias, hecha por las leyes de siete de Junio y once de Diciembre de mil ochocientos sesenta y uno, tres de Mayo y veintisiete de Octubre de mil ocho-

cientos sesenta y dos, no importaba suspender otras garantías que las especificadas en las mismas leyes, porque de lo contrario habrían omitido como inútil esta especificación, supuesto que la concesión de facultades omnímodas sin limitación, importaba la suspensión de todas las garantías. Que este es el sentido de las cuatro leyes mencionadas últimamente, es evidente, porque la de veintisiete de Octubre de mil ochocientos sesenta y dos, que como posterior en su línea, estaba vigente cuando se dió la de confiscaciones por el ejecutivo de la Unión, declara vigentes los artículos primero y segundo de la de tres de Mayo del mismo año. Estos artículos previenen, que continúen suspensas las garantías que lo estaban por la ley de once de Diciembre de mil ochocientos sesenta y uno, y ésta en su artículo primero, declara vigente la de siete de Junio del mismo año, y en el segundo faculta omnímodamente al ejecutivo de la Unión, para que dicte cuantas providencias juzgue convenientes en las circunstancias de aquella época, salvando la integridad del territorio nacional, la forma de gobierno establecida en la Constitución, y los principios y leyes de reforma. Entre uno y otro artículo, apenas puede concebirse prioridad de razón, pero no de tiempo; y no puede, por consiguiente, considerarse el segundo como posterior, derogatorio del primero como anterior, sino que ambos se han de considerar vigentes como de una existencia simultánea, nacida de la publicación de la ley; y siendo esto así, como efectivamente lo es, tendremos la necesidad de confesar, que la ley de once de Diciembre de mil ochocientos sesenta y uno, al conceder facultades omnímodas al ejecutivo de la Unión, le puso por restricción que respetara las garantías que la de siete de Junio (que declaró vigente) respetó en todo ó en parte, la integridad del territorio nacional, la forma de gobierno establecida en la Constitución y los principios y leyes de reforma; luego si la ley de siete de Junio res-

petó las garantías de que nadie podía ser castigado con pena propiamente tal, sino por la autoridad judicial, y que la pena de confiscación quedara abolida para siempre, consignadas en los artículos veintiuno y veintidos de la Constitución; el ejecutivo de la Unión no pudo, en uso de las facultades extraordinarias, dictar su dura ley de confiscaciones de diez y seis de Agosto de mil ochocientos sesenta y tres, ni menos aplicar tan terrible pena por medio de sus agentes fiscales, sin intervención de la autoridad judicial.

Quedan, pues, resueltas en sentido negativo las dos primeras cuestiones de derecho que me propuse al principio.

Siempre he tenido muy arriagada convicción de que el gobierno de la Unión extralimitó sus facultades extraordinarias al decretar la pena de confiscación, y mucho más al mandarla ejecutar por medio de sus agentes fiscales; pero desconfiaba de mis propias convicciones, hasta que ví en la ejecutoria que se registra á fojas ochenta y siete y ochenta y ocho del tomo segundo del derecho, confirmados mis propios razonamientos. Alego esta ejecutoria en comprobación de la justicia que me asiste en la solicitud de amparo; pues si bien el art. 26 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869 prohíbe que dichas sentencias se aleguen como ejecutorias para dejar de cumplir las leyes ó providencias que las motivan, de ningún modo se ha prohibido que se aleguen para uniformar la práctica y fijar el verdadero sentido de las leyes. Efectivamente, Señor Juez, como pudiera ser justo conceder al poderoso Sr. Lic. D. Octaviano Muñoz Ledo el amparo de la garantía del art. 22 de la Constitución, por la línea telegráfica de Guanajuato á la capital de la República, que se le confiscó, y negarse á mi infeliz poderdante el amparo de la misma garantía, por su casa que también se le confiscó?

Cuando se trató, pues, de la ejecución de la ley de confiscaciones, el gobierno del Esta-

do no tuvo derecho sino un deber el más imperioso de decir al ejecutivo de la Unión: Señor tu ley de confiscación está en abierta pugna con la Constitución federal, y como esta en su art. 126 ha establecido que ella será la suprema ley en toda la Unión, me veo en la triste necesidad de decirte que respeto; pero en el Estado que ha confiado su destino á mi cuidado y á quien ofrecí bajo la potestad supletoria del juramento guardar y hacer guardar el pacto fundamental de la República, no se ejecutará. No fué esta la conducta del C. gobernador Jesús Gómez Portugal: vió en la ley de confiscaciones un medio de adquirir pingües recursos, y con una avidéz escandalosa, se echó sobre la propiedad de varios particulares, causando á unos grave quebranto en su fortuna y á otros su ruina completa, que todavía deploran y odian nuestras instituciones por que ven en ellas la causa de tanta arbitrariedad.

Tal fué el motivo por que dije en mi escrito de demanda, que el Ciudadano gobernador había descubierto en la ejecución de la ley de confiscaciones, sus instintos ó tal vez sus convicciones muy poco respetuosas á la propiedad ajena: si estas expresiones han sido duras, ruego que se vean los hechos, y cuando se oigan las lúgubres voces, *Eccc homo*, se conocerá á su autor y se me dirá: no tuvo culpa al usar de voces, que si bien tienen un significado demasiado duro, fueron necesarias para la defensa de los derechos que representa.

Cuando en el Estado se ejecutaban las confiscaciones, estaban aun recientes los excesos cometidos por el ejército del general Miramon y la sangre mejicana se vertía con abundancia en Querétaro; por lo que estaban en efervescencia las pasiones, y mi representado, siguiendo mis consejos dejó trascurrir el tiempo sin hacer gestión alguna, no por que aprobara con su silencio operaciones tan ruinosas para él, sino convencido de que las pasiones se hallaban exaltadas, y en el arrebató de las pasiones la ra-

zon y la justicia ejercen un imperio debil; pero al fin la ley de amnistía de 14 de Octubre del año anterior, despues de haberse hecho esperar demasiado, vino á dar á los mejicanos la tranquilidad de que tanto necesitaban; é inmediatamente solicitó con la representacion que actualmente ejerzo, la devolucion de la casa de mi poderdante; única cosa que existia de los bienes que se le habian confiscado; pero nada obtuve, y esto me arrastró á entablar el presente juicio. La comunicacion visible á fojas ocho, manifiesta la causa ó razon que el gobierno ha tenido para negarse á la devolucion de la casa en cuestion; causa ciertamente falsa; pero que me pone en la necesidad de examinar las dos ultteriores cuestiones de derecho de las cuatro que me propuse al principio.

He dicho que el artículo segundo de la ley de once de Diciembre de mil ochocientos sesenta y uno, concedió al ejecutivo de la Union facultades omnímodas para que dictara cuantas providencias juzgara convenientes, con la restriccion sin embargo, de guardar la independencia é integridad del territorio nacional, la forma de gobierno establecida en la Constitucion y los principios y leyes de reforma. La mas antigua de las leyes de reforma que es la de veinticinco de Junio de mil ochocientos cincuenta y seis, establece en sus artículos veinticinco y veintiseis, la incapacidad de las corporaciones, ya civiles ya eclesiásticas, para adquirir en propiedad, ó administrar por sí bienes raices, y con este principio está en perfecta consonancia la parte final del art. 27 de la Constitucion federal. Por corporacion se entiende, segun el art. 3º de la ley de reforma mencionada, las comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías y archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios y en general todo establecimiento ó fundacion perpétua ó indefinida.

Así el gobierno como la junta directiva de instruccion primaria, son establecimien-

tos que tienen el carácter de duracion indefinida; luego son corporaciones. Si son corporaciones, luego tienen incapacidad legal para adquirir en propiedad ó administrar por sí bienes raices. Si tienen incapacidad legal para adquirir en propiedad y administrar por sí bienes raices; luego la donacion que el gobierno de la Union hizo al del Estado de los bienes raices que el primero confiscó á mi poderdante, es nula é insubsistente por falta de capacidad legal en el donatario para adquirir en propiedad ó administrar por sí bienes de esta especie.

Corolario de lo dicho es: que aun dando por cierto que el ejecutivo de la Union hubiera obrado dentro de la órbita de sus facultades al establecer la pena de confiscacion en la ley que lleva este nombre publicada en diez y seis de Agosto de mil ochocientos sesenta y tres; y al ejecutarla por medio de sus agentes fiscales, sin conocimiento de la autoridad judicial, habria siempre extralimitado sus facultades al hacer la donacion de la casa confiscada á mi poderdante, al gobierno del Estado; porque esta donacion peca contra los principios y leyes de reforma; luego el donatario no adquirió el dominio de la casa donada; luego esta existia al tiempo de la publicacion de la ley de amnistía de catorce de Octubre del año anterior, y aun existe actualmente sin haberse trasladado el dominio de ella á persona hábil para adquirirlo; luego segun el artículo octavo de esta ley debe devolverse á mi poderdante; y la ocupacion violenta que el gobierno del Estado ha hecho por un abuso del poder, reteniendo en su poder la casa en cuestion, podrá, si se quiere ser valiente y hasta intrépido; pero jamas podrá justificarse de legal, sino muy al contrario, de atentatoria contra las garantías concedidas por los artículos diez y seis y veintisiete de la Constitucion federal; puesto que ocupa la posesion ajena sin fundar la causa legal del procedimiento atentatorio, y la propiedad ajena sin los requisitos de indemnizacion previa, ni justifi-



can que se haga por utilidad pública; y todo esto en plena Constitución como fenecidas ya las facultades extraordinarias.

Queda, pues, demostrado que el gobierno de la Union no pudo donar legalmente al del Estado los bienes raíces confiscados á mi poderdante, ni el del Estado, ni la junta directiva de Instrucción primaria adquirir y conservar los bienes donados, quedando, con lo espuesto, resueltas en sentido negativo las dos ulteriores cuestiones de derecho de las cuatro queme propuse al principio.

Reasumiendo todo lo expuesto, resulta:

Primero; que el gobierno de la Union violó la garantía concedida en el art. veintiuno de la Constitución, haciendo ejecutar la pena de confiscación por medio de sus agentes fiscales, sin intervencion ni conocimiento de la autoridad judicial.

Segundo; que el mismo gobierno de la Union violó la garantía concedida en el art. veintidos de la Constitución, estableciendo la ley de confiscación en la ley de diez y seis de Agosto de mil ochocientos sesenta y tres.

Tercero; que así el gobierno de la Union como el del Estado, contravinieron á lo dispuesto en los artículos veinticinco y veintiseis de ley de reforma de veinticinco de Junio de mil ochocientos cincuenta y seis, y á la parte final del veintisiete de la Constitución federal, haciendo el primero y aceptando el segundo la donación de los bienes raíces confiscados á mi poderdante.

Cuarto; que el gobierno del Estado violó las garantías concedidas al hombre por los artículos diez y seis y veintisiete de la Constitución federal, molestando á mi poderdante en sus posesiones sin fundar la causa legal de su procedimiento, y ocupándole su propiedad sin los requisitos de indemnización previa y utilidad pública.

Por todo lo que. . . . . A. Vd. suplico, que apoyándose en lo dispuesto en los artículos ciento uno y ciento dos de la Constitución federal y primero de la ley orgánica de veinte de Enero de mil ochocientos

sesenta y nueve, se sirva concederme el amparo de las cuatro garantías violadas en perjuicio de mi poderdante; y de las cuales he hecho mencion en el párrafo anterior.

Protesto no ser de malicia y lo demas que fuere necesario.

Aguascalientes, Junio diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.—(firmado).—*Pedro P. Maldonado.*

### *Sentencia del Juez de Distrito.*

“Aguascalientes, veintidos de Junio de mil ochocientos setenta y uno.”

Visto este recurso de amparo, interpuesto por el C. Lic. Pedro Perez Maldonado, á nombre y en representación de D. Andres Avila, quien se queja, por conducto de su apoderado, de que la Gefectura de Hacienda sin la competente autoridad y extrajudicialmente, le confiscó por delito de infidencia, entre otros bienes, una casa ubicada en esta Ciudad, calle de la Hospitalidad número 1; habiéndosela confiscado segun lo dispuesto en la ley de 16 de Agosto de 1863; sin atender, á que tanto esa ley como las demas disposiciones apoyadas en esta, ó en otras anteriores de igual naturaleza, son notoriamente anticonstitucionales; porque la confiscación y la multa excesiva están prohibidas para siempre, de una manera bien clara y esplicita, por el art. 22 del pacto fundamental de la República. Que ademas, la confiscación, pena de las mayores entre las gravísimas, se le aplicó al quejoso por los agentes fiscales y en virtud de órdenes gubernativas; siendo así que por el artículo 21 del mismo código fundamental se ha declarado: «que la aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva del poder judicial;» pero tanto esa pena que le infligió el fisco, como el embargo y la enagenación de la finca confiscada, fueron otros tantos actos ejecutados extrajudicialmente, como antes se deja indicado. Que para mayor abundamiento, despues

de todas esas violaciones de la Constitucion nacional y de los derechos del hombre, proclamados y garantizados en ella, la casa reclamada, se cedió á beneficio de la instruccion pública, administrándose y aplicándose las rentas y productos de aquella, por la junta de enseñanza primaria; contraviendo tambien con ese proceder, á otro artículo constitucional, el 27, en cuya parte 2ª se hace la siguiente declaracion: «Ninguna corporacion civil ó eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominacion ó objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad ó administrar por sí bienes raíces.....» Se agrega por último, en la solicitud de amparo en favor de Avila, que si no se reclaman los demas bienes que se le confiscaron, es por haber sido cedidos en pago de créditos á que se hallaban afectos.

Vistos; el informe del C. Gobernador del Estado y el pedimento fiscal del C. Cefe de Hacienda, conviniendo ambos funcionarios en que la confiscacion y demas procedimientos ulteriores, fueron ejecutados con sujecion á las leyes y disposiciones tachadas de anticonstitucionales por el reclamante.

Vistas las pruebas promovidas y presentadas por el actor, las que plenamente justifican su legítima adquisicion como propietario de la casa confiscada; comprobando igualmente los hechos referidos, de los que pretende deducir el C. Lic. Maldonado, los derechos que trata de revindicar en pró de su poderdante

Vistos en fin, los alegatos de buena prueba de las partes y todo lo que mas fué conducente ver y examinar, impuesto detenidamente de tales antecedentes el Juez que suscribe, y

Considerando: que si bien es verdad que la magná carta nacional de 57, en su artículo 22, prohíbe para siempre la confiscacion y multa excesiva; tambien es muy cierto que la misma carta que prescribe tal perpetuidad, en el art. 29, autoriza la suspension completa y en conjunto, de las dos

mencionadas garantías, y de todas las demas, supuesto que solo exceptúa las que aseguran la vida del hombre; concediendo esa terrible autorizacion, en los casos extremos de invasion extranjeria, perturbacion grave de la paz pública ó en cualquiera otro conflicto que ponga en peligro á la patria; tres circunstancias apremiantes y angustiosas cada una de por sí, y mucho mas cuando concurren simultáneamente, como sucedió al expedirse por el Presidente de la República la ley de 16 de Agosto de 1863, tan fuertemente combatida como anticonstitucional, por el C. apoderado del quejoso, á pesar de que dicha ley está completamente amoldada en todas sus partes al artículo constitucional que acaba de citarse. Considerando: que así es efectivamente, porque aquella ley conforme á la cual se verificó la confiscacion reclamada, no solo está en consonancia con el art. 29 de la Constitucion, en cuanto á los casos previstos por aquel artículo constitucional, habiendo sido dictada en los momentos mas solomnes del mayor conflicto nacional; sino tambien están de conformidad ambas disposiciones, en cuanto á haberlas expedido el Presidente, previa plena y competentemente autorizado al efecto por el Congreso de la Union. Esto se puede demostrar fácilmente.

El art. 1º de la ley de 11 de Diciembre de 1861, *hace extensiva* la suspension de garantías á la relativa sobre propiedad, establecida en la primera parte del art. 27 de la Constitucion; y el art. 2º de la propia ley, dice á la letra. «Se faculta *omnímodamente* al ejecutivo para que dicte *cuantas providencias juzgue convenientes en las actuales circunstancias* (habla de aquellas en que se hallaba el país cuando se dió la ley) *sin mas restriccion* que la de salvar la independencia é integridad del territorio nacional, la forma de gobierno establecida en la Constitucion y los principios y leyes de reforma.» Ahora bien, siendo esto así, como efectivamente lo es, no se



puede culpar con justicia y buena fé al Gobierno general, de haber traslimitado alguna ni ninguna de las restricciones demarcadas, al expedir la ley de 16 de Agosto de 68; cuando por el contrario, dentro de los límites restrictivos y parapetado con ellos mismos, resistió á la invasion extranjera y al llamado imperio, procurando restablecer la paz pública gravemente perturbada y comprometida en toda la Nacion.

Considerando: que habiendo demostrado ya con evidencia ser permitido en pleno derecho constitucional, suspender debida y legalmente todas las garantías (salvo aquellas que aseguran la vida) siempre que sobrevengan los casos graves en que pelagra la patria, previstos por la Constitucion; es inconcuso que no deben atenderse las apasionadas quejas del presente recurso, contra la suspension que se hizo en regla, de las establecidas en el art. 21 del código fundamental, que declara que la imposicion de las penas propiamente tales, es exclusiva del poder judicial; y la consignada en el art. 27, que prohíbe la ocupacion de la propiedad sin consentimiento de su dueño y sin previa indemnizacion, y no mediando la causa de utilidad pública.

Y ciertamente que mucho ménos es reclamable en cuanto á este último punto la suspension por delito de infidencia, de la garantía de la propiedad, cuanto que motivó esa suspension la causa mas justa, mas noble y nacional; la salvacion de la patria.

Considerando que la incapacidad legal de la corporacion á quien se donó la casa confiscada, no pudiendo aquella adquirir ni administrar por sí bienes raíces, no es ni de ser una razon atendible al resolver este negocio; porque aun admitida esa incapacidad, ella no rehabilitaría de ningun modo á D. Andres Avila para recobrar la propiedad que legalmente perdió, ni destruiria la certeza del hecho real y positivo, de haber sido enagenada, bien ó mal aquella finca; pues su enagenacion es indudable; y el art. 8º de la ley de amnistía, ordena que

se devuelvan á los amnistiados, únicamente los bienes que no estuvieren enagenados al aplicarles la gracia concedida. Es un principio jurídico que, «donde la ley no distingue nadie debe distinguir;» y en el caso referido, la disposicion de que hace mérito el actor, hizo muy bien en no establecer diferencia alguna, entre enagenaciones legales y nulas, porque con tan semejante distincion habria hecho brotar un somillero de litigios y un cúmulo de complicaciones; pues de seguro que todos los amnistiados, cuyos bienes hubieran sido confiscados por delito de infidencia, se habrian acogido, para que se les devolviesen, al art. 22 de la Constitucion que prohíbe las confiscaciones.

Por otra parte, el art. 102 de la Constitucion general y el 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, previenen que las sentencias en los juicios de amparo, se reduzcan al caso especial del proceso; y aquí el caso especial se versa sobre una confiscacion, y no sobre apropiacion indebida; de suerte que no es competente el Juzgado de Distrito para pronunciar en esta causa de confiscacion, sobre la validéz ó nulidad de la consabida enagenacion, por nula que sea esta, y mucho menos para decidirla por infidencia.

Considerando: que si se lee con algun cuidado el art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, y se atiende á su colocacion en el capítulo 4º cuyo epígrafe es: «Sentencia en última instancia y su ejecucion,» debiéndose entender las leyes por su epígrafe, es claro que no es de las atribuciones de los Juzgados de Distrito, el exigir la multa impuesta por dicho artículo 16, y por eso este Juzgado se abstiene de imponérsela á D. Andres Avila.

En virtud de todo lo expuesto, el Juez que suscribe, definitivamente juzgando y sentenciando con arreglo á los artículos 29 de la Constitucion general, 1º de la ley de 11 de Diciembre de 1861, 1º de la ley de 16 de Agosto de 1863, 8º de la ley de 14 de Octubre último y 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, decreta lo siguiente:

Primero;—La justicia federal no ampara ni protege á D. Andres Avila, respecto de la confiscacion que se le hizo legalmente de la casa que fué de su pertenencia, ubicada en esta ciudad, calle de la Hospitalidad número 1.

Segundo; Notifíquese esta sentencia, remítase copia de ella para su publicacion en el periódico oficial del Estado, "Diario oficial del Gobierno Supremo de la República" y "Semanario judicial de la Federacion," y el expediente á la Suprema Corte de justicia para los efectos legales. El C. Lic. Luis Gutierrez Solana, Juez de Distrito del Estado, así lo proveyó y firmó con testigos de asistencia por ausencia del C. Secretario: damos fé.—(Firmados.)—*Luis Gutierrez Solana.*—Asistencia.—*Félix Pacheco.*—Asistencia.—*Arcadio Juarez.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Julio catorce de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 25 de Mayo último, promovió ante el Juez de Distrito del Estado de Aguascalientes el C. Lic. Pedro Perez Maldonado, en representacion del C. Andrés Avila, alegando: que á su poderdante, considerado como infidente, se le confiscaron sus bienes, entre los cuales se cuenta la casa núm. 1 de la calle de la Hospitalidad de Aguascalientes, cuya casa fué cedida por el Gobierno de la Union al del Estado, para dotar la enseñanza: que la confiscacion se ejecutó en cumplimiento de la ley de 16 de Agosto de 1863 y varias circulares posteriores; pero que violándose con esas disposiciones y con la ocupacion actual de la finca, las garantías que otorga á la persona de Avila, la Constitucion federal en sus artículos 16, 21, 22 y 27, pedia que se le amparase, devolviéndole la casa segun manda el art. 8º de la ley de amnistía fecha 14 de Octubre

de 1870, sin que fuera obstáculo la enagenacion que opone el Gobierno del Estado, porque esa enagenacion no existe, supuesto que las corporaciones no pueden adquirir bienes raíces, conforme á la ley de 25 de Junio de 1856, y á la parte final del artículo 27 citado de la Constitucion. Visto el informe del Gobernador dicho, contra quien se ha dirigido la queja, en cuyo documento ese funcionario expone, que la confiscacion á que se refiere el quejoso, fué en virtud de la ley y circulares que expresa, entre ellas la de 21 de Noviembre de 1866, expedida por el Gobierno legítimo de la República, que quiso castigar el mas grande de los crímenes, la traicion á la patria, y que el Gobierno del Estado no era mas que ejecutor de las leyes y disposiciones emanadas del de la República, investido de facultades amplísimas por el Congreso de la Union; que hecho el secuestro, el Gobierno del Estado, y la Junta de Instruccion pública pidieron al Ministerio respectivo que los productos de los bienes de Avila, se destinaron para el fomento de la instruccion, y concluye transcribiendo un acuerdo del Presidente de la República, por el que deniega la devolucion de la casa al representante de Avila, pedida invocando la ley de amnistía, por haberse consignado aquella finca anticipadamente á la instruccion pública. Visto el pedimento del Gefe de Hacienda federal, en ejercicio de la Promotoría fiscal por ministerio de la ley, en que sostiene que no hay lugar al amparo pretendido, porque la casa estaba legalmente confiscada, y á la fecha de la ley de amnistía hacia tres años que estaba enagenada segun antes se ha explicado. Vistas las pruebas rendidas por el Lic. Perez Maldonado, los alegatos de éste ciudadano y del Gefe de Hacienda como Promotor; la sentencia del Juez de Distrito y todo lo demás que ver convino.

Considerando: Primero; que la ley de 16 de Agosto de 1863, en cumplimiento de la cual se verificó la confiscacion de la casa

cuya devolucion ha reclamado el quejoso, fué expedida y ejecutada con las facultades concedidas por la ley de 11 de Diciembre de 1861, y posteriores relativas, por las cuales se suspendió la garantía de la propiedad, y se facultó al ejecutivo de la Union competentemente.

Segundo. Que la ley de amnistía de 14 de Octubre de 1870, en su artículo 8º dispone que se devuelvan á los amnistiados sus bienes confiscados, siempre que no estuvieren enagenados, al aplicarles la gracia concedida; y que la casa en cuestion, segun las constancias de autos, está enagenada desde el año de 1867, pues desde entonces el Gobierno General la cedió al del Estado de Aguascalientes, para dotar la instruccion pública.

Tercero. Que el punto sobre si la instruccion pública de Aguascalientes debe ó no conservar la propiedad de la casa cedida, no pertenece á este juicio, y

Cuarto. Que en consecuencia de lo expuesto, no existe la violacion de garantías que alega el quejoso, única causa de que procede el amparo con arreglo á la Constitucion federal que lo establece. Por tales fundamentos y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Aguascalientes pronunciada en 22 de Junio próximo pasado, por la que declara que: La Justicia federal no ampara ni protege á D. Andrés Avila, respecto de la confiscacion que se le hizo legalmente de la casa que fué de su pertenencia, ubicada en esta ciudad, calle de la Hospitalidad núm. 1.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de este fallo, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Me-

xicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Julio veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustin Peralta*, oficial mayor.

## COMISO.

*Juicio seguido en el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, sobre varios efectos de ropa aprehendidos á D. Juan Fernandez, en la casa de D. Isidoro Guerra, vecino de la Villa de Marin.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

En once del mismo devolvió el Promotor fiscal estos autos, con la siguiente exposicion: que se ha impuesto de las anteriores diligencias practicadas en este juicio, sobre comiso de varios efectos de ropa extranjera, que, por denuncia hecha á la oficina del Contraresguardo, establecido en esta frontera, fueron extraidos de la casa de D. Isidoro Guerra vecino de la Villa de Marin, cuyo individuo manifestó en el acto de la aprehension, eran dichos efectos de D. Juan Fernandez, quien los habia traído de Matamoras, conduciéndolos en un caballo, habiéndolos antes sacado de unos carretones que pasaron por la arena, y metiéndolos á su casa en la referida Villa, de noche, cuyos efectos estaban ocultos debajo de una cama, y el dueño de ellos ausente en Matamoras, para donde dijo el mismo Sr. Guerra, se habia devuelto despues de dejar allí aquellos efectos; que así mismo se ha impuesto de las excepciones alegadas por dicho Sr. Fernandez, pretendiendo este dar como procedencia de sus efectos, esta Ciudad y la de Cadereita Ji-